

Movilizaciones sociales en el Mediterráneo peninsular: una lectura desde la mitigación y la adaptación en referencia al cambio climático

Jaume Feliu
Joan Vicente
Sergi Nuss-Girona

Universitat de Girona

 0000-0002-1540-6914; jaume.feliu@udg.edu

 0000-0002-5557-3194; joan.vicente@udg.edu

 0000-0002-4379-2920; sergi.nuss@udg.edu



© de los autores

Recibido: junio de 2025
Aceptado: septiembre de 2025
Publicado: octubre de 2025

Citación recomendada: FELIU, Jaume; VICENTE, Joan y NUSS-GIRONA, Sergi (2025). «Movilizaciones sociales en el Mediterráneo peninsular: una lectura desde la mitigación y la adaptación en referencia al cambio climático». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 71(3), 585-605. <<https://doi.org/10.5565/rev/dag.1438>>

Resumen

El artículo analiza 480 casos de movilización social en el litoral peninsular español desde la década de 1970, relacionados, de forma explícita o implícita, con la adaptación y la mitigación al cambio climático. A partir de una base de datos elaborada en el marco del proyecto MOVxPAIMED, se clasifican los casos en seis grandes categorías: mitigación, protección de ecosistemas litorales, gestión del agua, infraestructuras resilientes, seguridad alimentaria y planificación territorial. El estudio combina métodos cuantitativos y cualitativos para interpretar la evolución, los actores, los resultados y las dimensiones territoriales de las movilizaciones. Las conclusiones revelan la importante interacción de los procesos económicos y sociales en cada territorio, la amplia diversidad de actores implicados y la enorme capacidad de influencia de las movilizaciones (casi el 40% logra éxitos totales o parciales). El artículo concluye afirmando que la acción colectiva es un factor clave en la construcción de territorios más resilientes y en la definición de una transición ecológica justa y democrática.

Palabras clave: movilizaciones sociales; cambio climático; litoral; paisaje; adaptación

Resum. *Mobilitzacions socials a la Mediterrània peninsular: una lectura des de la mitigació i l'adaptació en referència al canvi climàtic*

L'article analitza 480 casos de mobilització social a la costa peninsular espanyola des de la dècada de 1970, relacionats, de forma explícita o implícita, amb l'adaptació i la mitigació en referència al canvi climàtic. A partir d'una base de dades desenvolupada en el projecte MOVxPAIMED, es classifiquen els casos en sis grans categories: mitigació, protecció dels ecosistemes costaners, gestió de l'aigua, infraestructures resilients, seguretat alimentària i planificació territorial. L'estudi combina mètodes quantitatius i qualitatius per interpretar l'evolució, els actors, els resultats i les dimensions territorials dels moviments. Les conclusions revelen la important interacció dels processos econòmics i socials a cada territori, l'àmplia diversitat d'actors implicats i l'enorme capacitat d'influència dels moviments (gairebé el 40% aconsegueix èxits totals o parcials). L'article conclou afirmant que l'acció col·lectiva és un factor clau en la construcció de territoris més resilents i en la definició d'una transició ecològica justa i democràtica.

Paraules clau: mobilitzacions socials; canvi climàtic; litoral; paisatge; adaptació

Résumé. *Mobilisations sociales dans la péninsule méditerranéenne : une perspective sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique*

L'article analyse 480 mobilisations sociales s'étant produites sur le littoral péninsulaire espagnol depuis les années 1970 et liées explicitement ou implicitement à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. À partir d'une base de données élaborée dans le cadre du projet MOVxPAIMED, les cas sont classés dans les catégories suivantes : atténuation, protection des écosystèmes littoraux, gestion de l'eau, infrastructures résilientes, sécurité alimentaire et planification territoriale. L'étude associe des méthodes quantitatives et qualitatives pour interpréter l'évolution, les acteurs, les résultats et les dimensions territoriales des mouvements. Les résultats révèlent l'importante interaction des processus économiques et sociaux sur chaque territoire, la grande diversité des acteurs impliqués et l'énorme capacité d'influence des mouvements sociaux : quasi 40 % atteignent des résultats complets ou partiels. L'article en conclut que l'action collective est un facteur essentiel dans la construction de territoires plus résilients et dans la définition d'une transition écologique juste et démocratique.

Mots-clés : mobilisations sociales ; changement climatique ; littoral ; paysage ; adaptation

Abstract. *Social mobilisation on the Mediterranean Peninsula: A perspective on climate change mitigation and adaptation*

The article analyses 480 cases of social mobilisation on the Spanish peninsular coast from the 1970s onwards, related to the adaptation and mitigation of climate change either explicitly or implicitly. Using a database of data collected for the MOVxPAIMED project, we classify cases into six major categories: mitigation, protection of coastal ecosystems, water management, resilient infrastructure, food security and spatial planning. The study combines quantitative and qualitative methods to interpret the evolution, actors, results and geographical dimensions of this mobilisation. The results reveal the significant impact of economic and social processes in each area, the great diversity of actors involved and the enormous capacity for impact of the movements: almost 40% of them are totally or partially successful. The article concludes that collective action is a key factor in the construction of more resilient countries and the realisation of a more just and democratic ecological transition.

Keywords: social mobilisation; climate change; coastline; landscape; adaptation

Sumario

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Introducción | 4. Resultados |
| 2. Movilizaciones, paisaje y cambio climático | 5. Conclusiones |
| 3. Datos y metodología | Referencias bibliográficas |

1. Introducción

Esta investigación analiza los casos de movilización social cuyo objetivo principal y explícito es la protección del medio natural y del paisaje del litoral peninsular español, a partir de una mirada centrada en las estrategias frente al cambio climático, básicamente de mitigación y adaptación. Sus propósitos son identificar y ordenar las múltiples movilizaciones y conflictos ambientales ocurridos en las últimas décadas y reflexionar sobre ellos, con el fin de disponer de una base empírica amplia acerca de las problemáticas con implicaciones climáticas que se afrontan en este ámbito geográfico.

Los casos analizados proceden de una investigación en fase final de desarrollo¹ que ha generado una base de datos elaborada de manera conjunta por varios grupos de investigación de distintas universidades (Feliu et al., 2025). Los datos recogen información de 650 movilizaciones producidas entre los años setenta y la actualidad y distribuidas a lo largo de todo el litoral peninsular español, lo que constituye el mayor repositorio estructurado del país en este ámbito.

La información recopilada en los casos de estudio, como se explicará en el apartado metodológico, es relativamente variada y amplia, y se centra en el análisis de las movilizaciones, los actores, los impactos territoriales, las consecuencias, etc. Sin embargo, no contiene datos sobre la relación de dichas movilizaciones con las estrategias de cambio climático. Por ejemplo, no se sistematizó información sobre los argumentos climáticos utilizados en las protestas, ni tampoco si se hacía referencia al cambio climático como razonamiento ni en qué medida. Ello se debe a que no formaba parte de los objetivos iniciales de la investigación. Este artículo, por lo tanto, no se deriva directamente de la explotación de la base de datos mencionada, sino que constituye una reelaboración posterior de los datos recopilados y una interpretación *ad hoc* para el monográfico en el que se publica.

Por otra parte, a partir de una primera observación de las diferentes movilizaciones, no resulta evidente que las razones o los argumentos esgrimidos por las plataformas y entidades que lideran las propuestas incluyeran de forma habitual las estrategias frente al cambio climático (resiliencia, barreras naturales

1. *Paisajes salvados/paisajes por salvar: Movilizaciones sociales para la preservación del paisaje en el litoral mediterráneo español* (MOVxPAIMED). El proyecto PID2020-116850RB-I00 cuenta con investigadores de las universidades de Gerona, Tarragona, Valencia, Murcia, Granada y Málaga.

de protección contra eventos extremos, adaptación, etc.) como fundamentos principales de la protesta. Más bien, los argumentos más frecuentes han girado en torno a los valores ecológicos (biodiversidad, servicios ecosistémicos o, incluso, conectividad ecológica), culturales y patrimoniales, paisajísticos, sociales o, en algunos casos, productivos y económicos sostenibles.

Una de las principales razones es que la conciencia sobre la necesidad de adaptación al cambio climático es relativamente reciente, aunque creciente en el tiempo, mientras que los casos analizados abarcan un amplio período de cincuenta años de movilizaciones. Aun así, cabe suponer que los argumentos vinculados con la mitigación y la adaptación irán ganando peso en las reivindicaciones presentes y futuras.

En consecuencia, este texto no examina las relaciones explícitas de los movimientos con los valores estratégicos del cambio climático, sino más bien las relaciones implícitas, aquellas que defienden posiciones afines y que pueden identificarse desde la perspectiva actual. Se busca, por tanto, clasificar los diferentes casos de movimientos sociales según la tipología de estrategia frente al cambio climático y realizar una interpretación posterior de las problemáticas de mitigación y adaptación.

2. Movilizaciones, paisaje y cambio climático

Las teorías sobre los movimientos sociales y la movilización han sido objeto de intensa investigación y debate, especialmente en el campo de las ciencias políticas, desde el último cuarto del siglo xx. Las raíces de la movilización social se remontan a pensadores como Marx, Simmel y Weber, pero fue en la década de 1980 cuando surgió el concepto de «nuevos movimientos sociales» (Touraine, 1981; Tilly, 2004). Estos se diferenciaban de los «viejos movimientos sociales», vinculados a partidos políticos, clases o naciones, y destacaban por su capacidad para unir a personas diversas y generar impacto.

Durante este período, los análisis teóricos se diversificaron para explicar los orígenes, los actores, las implicaciones y los resultados de la movilización social en relación con las instituciones, la sociedad civil, los partidos políticos y la legislación. Giugni y Grasso (2015) revisaron los movimientos ambientales y los organizaron en torno a cuatro ejes: la opinión pública y los valores políticos que los originan; los tipos de organizaciones y redes; las formas de protesta y actividades, y los discursos y los marcos utilizados por los actores. En este contexto, el concepto de identidad resulta clave para entender cómo se articulan los movimientos y qué motores impulsan la movilización. Castells (1997) y Tilly (2004) abordaron esta cuestión, incorporando en ella el papel del territorio y el medio ambiente (Storey, 2018).

El territorio y el paisaje aparecen en las movilizaciones sociales de distintas maneras: como motivo, como pretexto, como escenario, como instrumento o como objetivo en sí mismos. Esto es comprensible, ya que los cambios en el espacio y el entorno natural son una manifestación visible de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales (Nel-lo, 2003). Además, el espacio

funciona como elemento de representación y cohesión social, puesto que permite la conformación de identidades locales, tal como se observa también en los estudios sobre el nacionalismo (Nogué, 1998).

Los movimientos sociales de carácter territorial y ambiental han sido una expresión recurrente del descontento social global (Castells, 1997; Giugni y Grasso, 2015). A finales de la década de 1980, los movimientos ambientalistas adquirieron una notable relevancia. Según Giugni y Grasso (2015), inspirados en Rootes (2004), estos movimientos pueden definirse como «una red laxa, no institucionalizada de interacciones informales, que incluye tanto individuos y grupos no afiliados como organizaciones formales de diversos niveles, que participan en la acción colectiva por una identidad compartida o una preocupación ambiental».

Subrá (2016) atribuye esta creciente relevancia a la pérdida de prestigio y legitimidad de las instituciones y los expertos que avalan grandes proyectos transformadores del medio ambiente y el paisaje. Otros autores, como Nel-lo (2003) o Bobbio y Zeppetella (1999), vinculan esta tendencia a los procesos de reescalamiento (Brenner, 2004; Castells, 1997), que fracturan la relación entre las áreas afectadas por las transformaciones y quienes se benefician de ellas. Este fenómeno, identificado inicialmente en Europa, se ha consolidado como un rasgo distintivo de los procesos de desposesión y de (in)justicia ambiental, especialmente en el Sur Global (Scheidel et al., 2018).

Así, el paisaje, como síntesis de la interacción entre personas y medio ambiente, se convierte en objeto de intereses contrapuestos entre ciudadanía, empresas y actores políticos (Meyer, 1995; Davico et al., 2009; Scheidel et al., 2018). Los movimientos sociales emergen como una forma de generar recursos que permiten a la sociedad influir en otros actores de la gobernanza territorial, como responsables políticos, medios de comunicación, academia o técnicos (Aguilar, 2021). Estos recursos son fundamentales para aprovechar ventanas de oportunidad política y para que los movimientos sean agentes activos y no meros receptores pasivos de las dinámicas de desarrollo.

Con el tiempo, algunos de estos recursos se fortalecen y se complejizan, con lo que permiten obtener resultados sostenibles a gran escala y a largo plazo. Los movimientos reactivos pueden detener daños ambientales, proteger elementos naturales o culturales y contribuir a crear nuevas narrativas territoriales que se reflejan en regulaciones, políticas y planificación (Nuss et al., 2023). Aunque sus acciones pueden parecer poco significativas en términos cuantificables inmediatos, estos movimientos ofrecen una interpretación del contexto cambiante y resultan ser actores clave en la construcción de la conciencia social y ambiental.

Los movimientos sociales con un enfoque territorial y ambiental se convierten, por tanto, en unos actores más del desarrollo territorial, capaces de moldear los paisajes en sus dimensiones biofísica, conceptual-política y cultural-social (Scheidel et al., 2018; Villamayor y García-López, 2021).

Una de las dimensiones que surgen especialmente en las dos últimas décadas como máximo es la relacionada con la emergencia climática, la adaptación y la

mitigación. Esta relación es controvertida y los movimientos locales no siempre se alinean con las lógicas gubernamentales. Algunos muestran que ciertas comunidades costeras se oponen a proyectos de recuperación de tierras confundidos con medidas de adaptación, por amenazas a sus medios de vida y a sus paisajes (Marks, 2023). También se observan conflictos similares derivados de políticas de mitigación (Zografos y Martínez-Alier, 2009; Hunsberger et al., 2017; Rodríguez-Segura et al., 2023). Pero también encontramos experiencias de movimientos socioambientales que han sido fundamentales para articular demandas de justicia climática y protección del paisaje en contextos locales donde las comunidades se enfrentan directamente a los impactos del cambio climático (Gravante y Poma, 2020). Se concluye que la participación activa de la sociedad civil es esencial para impulsar políticas de adaptación más equitativas y sostenibles. Otras experiencias también concluyen, aunque por procesos liderados por las administraciones, que la participación de las comunidades locales, la cocreación y la inclusión de diversos actores son necesarios para una adaptación efectiva y equitativa (Múnera-Roldán et al., 2023; Galan et al., 2023).

En la sociedad civil española, la introducción y la popularización de los conceptos de mitigación y adaptación en referencia al cambio climático, así como su uso en movilizaciones para la defensa del paisaje y el territorio, han sido el resultado de un proceso gradual. A medida que los impactos se hacían evidentes, a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, impulsado por el Protocolo de Kioto, el concepto de mitigación circuló entre varias ONG y la comunidad científica, seguido por el de adaptación. Desde mediados de la década de 2000, planes nacionales o autonómicos, como el PNACC (2006) y la Estrategia Española de Cambio Climático (2007), contribuyeron a su difusión (Jiménez, 2013). En la década de 2010, la conciencia pública y la familiaridad con ambos términos crecieron significativamente. Paralelamente, el movimiento ecologista, con una larga trayectoria en la defensa territorial, comenzó a incorporar estos argumentos de forma más explícita. Si bien las luchas iniciales se centraban en la conservación y la contaminación, desde mediados de la década de 2000 se empezaron a vincular los impactos territoriales con la vulnerabilidad climática (adaptación) y las emisiones (mitigación). A partir de 2010, este enfoque se consolidó, a menudo bajo el marco de la justicia climática, vinculando la defensa del paisaje con la resiliencia climática (Díaz Orueta, 2023).

3. Datos y metodología

El método utilizado parte, pues, de una base de datos, una recopilación de casos de movilización social frente a transformaciones del territorio y del paisaje en el litoral peninsular español elaborada entre los años 2022 y 2024. Los datos se estructuran en un registro por cada caso y múltiples variables con referencias geográficas puntuales.

Las variables disponibles utilizadas para el análisis son: 1) denominación del caso; 2) titular descriptivo del caso analizado; 3) decenio de inicio;

4) uso o valor (pre)existente en el momento del conflicto; 5) uso propuesto que desencadena la movilización; 6) resultado de la movilización; 7) afectación a un bien o a un espacio bajo una figura de protección legal; 8) nombre de la entidad, asociación o agrupación que lidera y organiza la movilización, y 9) localización geográfica.

Las variables 1 y 2 identifican y describen el caso. La variable 3 sitúa temporalmente el caso, no tanto su duración sino su inicio, independientemente de si está cerrado o no. Las variables 4 y 5, organizadas en las mismas categorías, permiten hacer un cierto análisis de los cambios de usos del suelo que provocan los proyectos de transformación. La variable 6 describe el resultado de la movilización en las categorías: éxito, éxito parcial, perdido, éxito temporal y abierto. Permite analizar cuestiones como la eficacia de las movilizaciones o la cantidad de casos aún para resolver. La variable 7 facilita información sobre la eficacia en la protección de los espacios naturales. La variable 8 permite valorar la dimensión organizativa de las movilizaciones, las redes y las conexiones que se producen, además de las diferencias territoriales que muestran los actores. Finalmente, la variable 9 permite realizar una lectura territorial de los datos.

A partir de esta base de datos se desarrolló una primera indagación para clasificar los casos según diferentes temáticas relacionadas con la mitigación y la adaptación. Los epígrafes escogidos fueron los que agrupaban las diferentes temáticas: *a)* mitigación, *b)* protección de ecosistemas litorales, *c)* gestión del agua, *d)* infraestructuras resilientes, *e)* seguridad alimentaria y *f)* planificación territorial y urbanística. Las nuevas etiquetas se clasificaron manualmente a partir de la interpretación de los diferentes datos y se añadió esta información como una nueva variable que permite segregar temáticamente y analizar separadamente los casos de la base de datos. La descripción de estos conjuntos temáticos que permiten realizar la clasificación de los casos es la siguiente:

- a) Mitigación.* Incluye conflictos vinculados a la reducción de emisiones —como parques eólicos, plantas solares o infraestructuras de gestión de residuos— que generan impactos ambientales o sociales a nivel local. También incluyen proyectos, normalmente agroindustriales, que implican un aumento relevante de emisiones por su escala. Las disputas se centran en su localización, escala, participación pública y efectos sobre el paisaje, la biodiversidad o las comunidades. Estos casos reflejan las tensiones entre la acción climática y la justicia territorial, cuestionando la necesidad de llevar a cabo estrategias sostenibles y socialmente aceptadas.
- b) Protección de ecosistemas litorales.* Esta categoría agrupa conflictos socioambientales centrados en la defensa de ecosistemas costeros de alto valor ecológico y paisajístico —como dunas, marismas, deltas, estuarios o playas bien conservadas— frente a presiones urbanísticas, turísticas o extractivas. Las movilizaciones sociales no solo buscan frenar intervenciones amenazantes, sino que también subrayan el valor ecológico de estos entornos, su

contribución a la biodiversidad y su función como barreras naturales ante el cambio climático.

- c) *Gestión del agua*. Incluye conflictos relacionados con la distribución, el acceso, la calidad o la alteración de los recursos hídricos. Abarca disputas por infraestructuras hidráulicas, contaminación de aguas, sobreexplotación de acuíferos, degradación de ecosistemas acuáticos y proyectos de restauración. En todos los casos, el agua se presenta como recurso central en disputa, afectado por la presión humana y los retos de sostenibilidad y equidad.
- d) *Infraestructuras resilientes*. Comprende conflictos vinculados a grandes intervenciones territoriales —infraestructuras de transporte, puertos o desarrollos urbanísticos— que generan impactos en el paisaje, la biodiversidad y la capacidad de adaptación del territorio al cambio climático. Las controversias se centran en su sostenibilidad, los riesgos asociados y su efecto ambivalente como posibles factores de vulnerabilidad o herramientas de adaptación.
- e) *Seguridad alimentaria*. Esta categoría reúne conflictos en los que la producción, el acceso o la sostenibilidad de los alimentos se ven afectados por las dinámicas territoriales y los impactos del cambio climático. Las disputas reflejan tensiones entre el desarrollo urbano, industrial o turístico y la necesidad de preservar suelos agrícolas, recursos hídricos y prácticas agroecológicas. Se incluyen casos de pérdida de tierras cultivables, contaminación, alteración de ciclos hidrológicos y vulnerabilidad de los sistemas alimentarios ante eventos climáticos extremos.
- f) *Planificación territorial y urbanística*. Esta categoría agrupa conflictos derivados de procesos de ordenación del territorio y desarrollo urbano, como planes generales, proyectos de urbanización o gestión del litoral. Las disputas se centran en el impacto sobre el paisaje, los espacios naturales y agrícolas, el patrimonio cultural y la sostenibilidad frente al cambio climático. Se cuestionan modelos de crecimiento que promueven la artificialización excesiva del suelo y aumentan la vulnerabilidad territorial, en contraste con propuestas que priorizan la conservación, la resiliencia y la participación pública en la toma de decisiones.

4. Resultados

El conjunto original de casos de movilizaciones sociales proveniente de MOVx-PAIMED recogía un total de 650 casos. De estos, se han seleccionado 480, es decir, los que tenían relación con alguno de los ámbitos descritos de adaptación o mitigación en referencia al cambio climático. De esta forma se han identificado 70 casos (el 10%) relacionados con la mitigación y 410 (el 63%), con la adaptación (tabla 1).

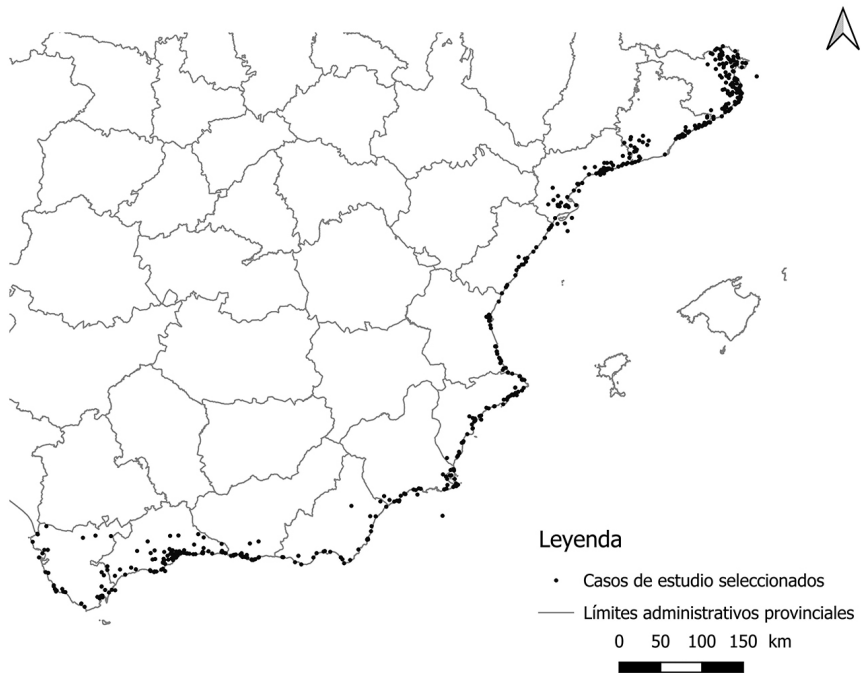
La distribución total de los casos se observa en el mapa 1, donde cada punto corresponde a una movilización. Tal y como sucede ya en la base de datos original, hay diferencias en los casos recogidos en diferentes territorios. Por ejemplo, en Cataluña fueron reportados dentro de las comarcas litorales,

Tabla 1. Clasificación de los casos estudiados

Mitigación		70
Adaptación	Protección de ecosistemas litorales	113
	Gestión del agua	48
	Infraestructuras resilientes	70
	Planificación territorial y urbanística	146
	Seguridad alimentaria	33
Sin relación		240
Total		650

Fuente: elaboración propia.

Mapa 1. Distribución de los casos



Fuente: elaboración propia.

mientras que en la Comunidad Valenciana se centraron en los municipios litorales. Esta diferencia, junto a otros factores, como la recopilación de casos más desarrollada en provincias como Gerona, por razones de antigüedad de la investigación, confieren un relativo sesgo territorial en los datos. Este factor se considera y se incorpora en la interpretación a partir del uso, por ejemplo, de datos relativos.

4.1. Distribución y clasificación temática

La distribución de los casos según las categorías de mitigación y adaptación en referencia al cambio climático se encuentran representadas en el mapa 2. En esta ocasión se ha optado por representar la densidad de puntos para su mejor interpretación.

Los casos de movilización social relacionados con la *mitigación* muestran una distribución geográfica que refleja tanto la apuesta por las energías renovables como algunos conflictos con implicaciones en la emisión de GEH (mapa 2.A). Se observa una concentración de casos en Cataluña, donde la instalación de parques eólicos y el desarrollo de macrogranjas generan controversias. Destacan los parques eólicos, especialmente los de la provincia de Gerona, donde se han descrito un total de 10 propuestas que afectan a numerosos municipios: Ventalló, Capmany, La Jonquera, Portbou, Biure, Santa Cristina d'Aro y varios municipios del golfo de Rosas. En Gerona también vemos un gran proyecto solar en Navata, que provoca preocupaciones sobre la ocupación del suelo y el impacto en la agricultura, así como la construcción o la ampliación mayoritariamente de granjas porcinas en Calabuig, Cantallops, Rabós, Pedret i Marzá, Sant Climent Sescebes y Palau de Santa Eulàlia. En el resto de Cataluña, especialmente en Tarragona, vemos otros casos también de parques eólicos en la Serra del Bolet, el Coll d'Alba, l'Ametlla de Mar (Proyecto Zefir), pero también de variadas tipologías: central de energía solar en Tarragona, central térmica en Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant, centrales nucleares de Ascó y Vandellós, almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC), etc.

La otra zona que concentra casos de esta tipología es Andalucía, por temáticas como el funcionamiento o la construcción de centrales térmicas en Campañillas, en el río Guadalhorce (Málaga), o Los Barrios (Cádiz). La construcción de grandes plantas fotovoltaicas también se encuentra muy presente en este territorio, como los siete parques solares en la campiña de Almogía (Málaga), de carácter público, las plantas fotovoltaicas en la Sierra de las Nieves (Málaga), con un consumo de suelo de más de 2.000 hectáreas y en parte dentro de la zona de protección de un parque nacional, la planta en el Valle Natural Río Grande (Málaga), Llanos de la Plata (Málaga) o Campiña de Jimena (Cádiz), una macroplanta de 2.400 hectáreas en un medio rural cuya subsistencia depende en gran medida de sus valores paisajísticos (natural y agrícola).

Los conflictos asociados a la *protección de ecosistemas litorales* (113 casos) se distribuyen de manera heterogénea a lo largo de la franja mediterránea peninsular, concentrándose especialmente en áreas de alta presión urbanística y turística (mapa 2.B). Las provincias de Gerona, Alicante y Málaga destacan como focos principales de movilización, seguidas por otras zonas costeras de Andalucía oriental, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. Esta concentración territorial refleja la correlación existente entre la vulnerabilidad ecológica del litoral y la intensidad de los procesos de urbanización masiva, expansión turística y transformación del paisaje costero. Se observan patrones comunes de degradación en entornos como dunas, humedales, playas vírge-

Mapa 2. Distribución de los casos de movilización social según su tipología en los ámbitos de adaptación y mitigación en referencia al cambio climático. Densidad de puntos

A. Mitigación



B. Protección de ecosistemas litorales



C. Gestión del agua



D. Infraestructuras resilientes



E. Seguridad alimentaria



F. Planificación territorial y urbanística



Leyenda:

Densidad de casos

■ Máxima
■ Mínima

— Límites administrativos provinciales

0 100 200 300 km

Fuente: elaboración propia.

nes y sistemas de marismas. En Cataluña se pueden ver casos como la Pletera (Gerona), un conflicto por la preservación de los sistemas dunares y las marismas, la defensa de la laguna de La Ricarda (delta del Llobregat) y su entorno frente a los proyectos de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, o la conservación de la Punta de la Móra y el Bosc de la Marquesa (Tarragona), para la protección de un tramo de costa natural frente a planes urbanísticos y turísticos que ponen en riesgo la conservación de los bosques litorales y la integridad del paisaje. En la Comunidad Valenciana se encuentra el ejemplo de la Devesa de El Saler (Valencia), con una problemática de presión urbanística y la degradación de un ecosistema dunar único, donde se impulsan movimientos ciudadanos para la renaturalización y la limitación de accesos turísticos, o la protección de la costa de la Marina Alta (Alicante), de fuerte presión urbanística sobre calas y acantilados naturales.

En Murcia vemos el ejemplo del Parque Regional de Calblanque (Cartagena), un conflicto que surge ante la masificación turística y la falta de regulación en accesos y aparcamientos que comprometen la conservación de este espacio natural protegido de gran valor ecológico.

Finalmente, en Andalucía se reportan casos como el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (Almería), donde se reclama la protección de los humedales costeros frente a amenazas como la expansión agrícola intensiva; la defensa de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) para evitar la degradación de este humedal costero debido a presiones urbanas, vertidos y proyectos de infraestructuras, y el cordón dunar de Doñana (Huelva) sobre la protección de las dunas y las marismas frente a proyectos de infraestructuras y extracciones hídricas en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los conflictos asociados a la *gestión del agua* en el Mediterráneo peninsular se concentran especialmente en territorios donde la presión sobre los recursos hídricos es más intensa debido a la expansión agrícola, urbanística y turística (mapa 2.C). Provincias como Tarragona, Murcia y Alicante destacan como focos principales de movilización, seguidas por otras zonas de Andalucía oriental, Comunidad Valenciana y Cataluña. Esta distribución territorial refleja la correlación existente entre la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de masas de agua y los grandes proyectos hidráulicos con impactos territoriales y ecológicos significativos. Se observan patrones comunes de conflicto en torno a la reducción de caudales ecológicos; la contaminación por vertidos agrícolas y urbanos, y la oposición a planes de trasvase y nuevas infraestructuras hídricas.

En Cataluña destaca el conflicto en defensa del delta del Ebro (Tarragona), donde la Plataforma en Defensa de l'Ebre se movilizó contra el Plan Hidrológico Nacional, por su amenaza al caudal del río y a la sostenibilidad del delta. En la Comunidad Valenciana encontramos la problemática de la contaminación puntual del río Serpis (Alicante), donde diversas asociaciones ambientalistas denunciaron vertidos que afectaban gravemente a su ecosistema. También en esta comunidad, la presión sobre los acuíferos causada por el turismo en la Marina Alta ha generado conflictos en torno a la sostenibilidad del abastecimiento hídrico.

En Murcia, el caso más emblemático es el del mar Menor, afectado por décadas de vertidos agrícolas que han provocado su eutrofización y episodios masivos de mortandad de fauna marina, lo que ha originado una fuerte respuesta social para exigir una gestión integral de su cuenca. En Andalucía oriental encontramos conflictos como la contaminación de los ríos de la Costa Tropical de Granada, donde organizaciones locales han protestado contra vertidos urbanos no depurados en el litoral de Almuñécar. Asimismo, en Almería, en la costa de Aguadulce y Roquetas de Mar, se denuncian constantes vertidos de aguas residuales sin el tratamiento adecuado, lo que afecta gravemente al entorno marino.

La categoría *infraestructuras resilientes* muestra una concentración en toda Cataluña, Alicante, Murcia y el conjunto de Andalucía. Se observa una preocupación recurrente por el impacto de las infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos) en los ecosistemas y el paisaje. Muchos conflictos surgen por la ocupación de terrenos agrícolas o naturales para la construcción de estas infraestructuras. Además, se identifican movilizaciones relacionadas con proyectos urbanísticos y de desarrollo turístico que se consideran insostenibles o que aumentan la vulnerabilidad de la costa frente a los efectos del cambio climático, como la regresión costera. Es el caso de la canalización de cauces fluviales de las rieras del Maresme (Malgrat de Mar, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Teià) o la canalización del río Grande de Adra (Almería), así como el encauzamiento del río Campanillas o del Guadalhorce (Málaga). En general, estos casos reflejan la creciente conciencia social sobre la necesidad de planificar y construir infraestructuras que no solo sean funcionales, sino también respetuosas con el medio.

En cuanto a infraestructuras viarias, encontramos conflictos como la prolongación de la autopista C-32 de Palafolls a Lloret de Mar a través de zonas naturales protegidas (Gerona), el trazado de la C-31 entre Mataró y Palafolls (Barcelona) o la autopista Cartagena-Vera que atraviesa Marina Cope (Murcia).

La construcción o la ampliación de puertos, especialmente deportivos, es otro gran ámbito de movilización muy centrado en Cataluña, como los puertos de Port Lligat, L'Escala, Tossa de Mar (Gerona), Santa Susanna, Calella, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Masnou (Barcelona), Roda de Barà, Tarragona, Cap de Salou, L'Ampolla (Tarragona), Altea (Alicante), El Gorguel (Murcia), Motril o Almuñécar (Granada).

En *seguridad alimentaria* vemos casos de transformación de importantes lotes de tierras agrícolas hacia otras finalidades, habitualmente urbanas, ya sea por la expansión de las poblaciones limítrofes o por el crecimiento de zonas de uso residencial relacionado con usos turísticos. Son menos habituales los usos industriales o logísticos. La distribución de los casos abarca mayoritariamente la zona septentrional (Cataluña y Valencia) y la zona central de Andalucía. Encontraríamos algunos ejemplos en la urbanización Hort d'en Negre, en Castelló d'Empúries (Gerona), por la construcción de 320 viviendas en terrenos agrícolas; en la construcción de un campo de golf y una urbanización en Gualta (Gerona), reclasificando 70 hectáreas agrícolas, o en el conflicto por

el planeamiento urbanístico de la Vall de Rials (municipio, Barcelona) como polígono industrial. En la Comunidad Valenciana vemos casos como el movimiento Per l'Horta para la protección de la huerta de Valencia o el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet para la desclasificación de los terrenos para una huerta productiva. Y algunos ejemplos de Andalucía son el campo de golf en los acantilados de Maro o el azud de Cerro Blanco (río Grande) por la construcción de una presa, con los perjuicios consiguientes para los agricultores del Valle del Guadalhorce.

Finalmente, los casos de movilización social relacionados con la *planificación territorial y urbanística* se distribuyen ampliamente por el territorio, reflejando la diversidad de problemáticas y presiones urbanísticas que afectan a las distintas comunidades autónomas, muy a menudo relacionadas con el desarrollo turístico y residencial. También son frecuentes los conflictos en áreas periurbanas y agrícolas, donde la expansión de las ciudades y la construcción de infraestructuras compiten con la preservación de suelos fértiles y espacios naturales.

En Cataluña encontramos casos como el rechazo a una urbanización en Vulpellac (Forallac) por la afectación al entorno rural y patrimonial, o el Preventorio de la Savinosa (Tarragona) sobre la conservación de un espacio natural frente a proyectos urbanísticos. En la Comunidad Valenciana vemos el cambio de uso de parcela en Benimaclet, conflicto por la recalificación de una parcela destinada a equipamientos para la construcción de viviendas, con movilización vecinal por la pérdida de servicios públicos. También el Plan Rabasa, un conflicto mediático por la urbanización de una extensa área, con sospechas de corrupción y debate sobre el modelo de desarrollo territorial.

En Murcia hay casos como el de Nuevo Carthago para la recalificación irregular de terrenos de la franja del mar Menor para construir un gran complejo residencial con unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, o el proyecto urbanístico Playa de La Cola (Águilas), que contempla la construcción de 2.313 viviendas turísticas.

En Andalucía vemos la movilización contra la construcción del campo de golf más grande de Europa en Salobreña (Granada) o el proyecto en los terrenos de La Térmica (Málaga) por la urbanización de terrenos industriales en la costa, con debate sobre la protección del patrimonio industrial y el impacto en el paisaje litoral.

4.2. Indagación de los casos a partir de sus distintas variables

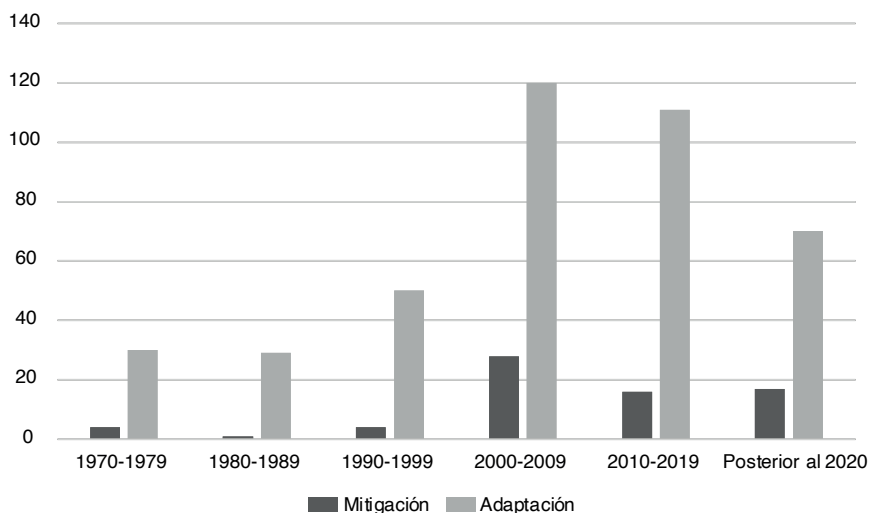
4.2.1. Evolución temporal

En términos temporales, se observa un aumento de las movilizaciones a medida que nos acercamos al presente. Este incremento puede explicarse, por un lado, por el crecimiento real en el número de movilizaciones, lo que plantea la necesidad de determinar si responde a una intensificación de los proyectos de transformación territorial o bien a una mayor capacidad organizativa y de respuesta por parte de la ciudadanía. Por otro lado, influye la mayor dispo-

nibilidad de fuentes digitales y la cercanía temporal, que facilita el acceso a información y la recuperación de la memoria colectiva sobre casos recientes. Sea cual sea la causa predominante, la evolución muestra un patrón ascendente homogéneo en categorías como *protección de ecosistemas litorales* o *infraestructuras resilientes*. En contraste, en la categoría *planificación territorial y urbanística* se detecta un incremento significativo de conflictos a partir del año 2000, coincidiendo con el auge del desarrollo urbanístico asociado al *boom* inmobiliario de finales de la década de 1990 y la siguiente. Esta tendencia no se revierte tras la crisis económica de 2008, ya que en la década de 2010 y en los registros disponibles de la de 2020 los casos en esta categoría continúan siendo los más numerosos. Esto sugiere que, pese al parón inmobiliario, los grandes proyectos territoriales siguieron generando una fuerte respuesta ciudadana, lo que consolidó este ámbito como uno de los principales focos de conflicto y movilización.

Como se ha dicho, la difusión y el uso de argumentos de mitigación y adaptación en los movimientos ecologistas son recientes en nuestra sociedad y se generalizan a partir de la década de 2010. En este período, pues, se observan 214 movilizaciones, la mayoría aún sin resolver (un 60%), en todas las categorías analizadas. Destaca el aumento de casos en protección de ecosistemas litorales, que alcanza su máximo histórico en la década de 2010, con ejemplos distribuidos por todo el Mediterráneo (ampliación del aeropuerto del Prat, apertura de golas en el mar Menor, urbanización de Valdevaqueros-Los Lances en Cádiz, etc.). A partir de 2020 el aumento más destacable es el de los casos de mitigación, con múltiples movilizaciones en contra del desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas especialmente presentes en Almería,

Gráfico 1. Evolución de las movilizaciones según el año de inicio



Fuente: elaboración propia.

Málaga y Cádiz (río Grande, Llanos de la Plata, campiña de Almogía, Jímena, etc.), así como los casos de transporte con líneas de conexión o subestaciones eléctricas (Castellar de la Fra, La Alcaidesa). Otra tipología que aparece con fuerza son los parques eólicos marinos (cabo de Gata, bahía de Rosas), a los que se les imputan impactos paisajísticos y sobre la biodiversidad. En todos estos casos se produce la paradoja de la oposición de grupos ecologistas a medidas de mitigación por razones como el impacto ambiental, social, territorial, o por la falta de planificación y participación ciudadana. Una paradoja que refleja la complejidad de gestionar las respuestas a la emergencia climática mediante una actuación urgente de descarbonización de la economía y evitar rebasar los umbrales científicos de calentamiento global, y a la vez satisfacer los anhelos locales que sitúan una idea estática del paisaje en la columna vertebral del bienestar, a pesar de que los efectos y los impactos acumulativos, exponenciales y en cascada del aumento de temperaturas sean mucho más graves, estructurales y permanentes en el tiempo.

4.2.2. Usos del suelo

Respecto a otra variable, la información del tipo de uso del suelo preexistente en cada tipología de proyecto, se observa una distribución lógica. Por ejemplo, la gran mayoría de movilizaciones por temas de seguridad alimentaria se producen en suelos agrícolas (un 87,9%), o las movilizaciones para la protección de ecosistemas litorales tienen lugar en suelos naturales (un 64,6%). En todo caso, destaca que una parte muy importante de ejemplos de planificación urbana y territorial se producen en terrenos originalmente de tipo natural (un 64,4%). Es decir que los espacios naturales, los más valiosos para realizar acciones de adaptación al cambio climático, ya sea para soluciones basadas en la naturaleza o para la conservación de la biodiversidad, son los primeros damnificados por las transformaciones. Respecto a las propuestas de mitigación, normalmente parques eólicos o fotovoltaicos, los principales usos preexistentes son natural (un 35,7%), agrícola (un 28,6%) y forestal (un 17,1%), en coherencia con la necesidad de disponer de grandes extensiones de terreno para la instalación de estas infraestructuras, tanto para maximizar la producción de energía por kilovatio instalado, como para la optimización de costes de construcción y mantenimiento.

En referencia a los usos que desencadenan las movilizaciones, destacan los conflictos relacionados con la gestión del agua, muy relacionados con explotaciones agrícolas o ganaderas (un 20,8%). También los conflictos para la protección de los ecosistemas litorales (un 43,4%) y la seguridad alimentaria (un 72,7%) son provocados por la propuesta de desarrollo de usos urbanos o turísticos.

Asimismo, más de la mitad de los proyectos que corresponden a ecosistemas litorales afectan a un espacio con figura de protección legal (un 51,3%), subrayando que a menudo los espacios naturales no quedan blindados completamente con las figuras de protección, y que sigue siendo necesaria la movilización para protegerlos. En cambio, por otro lado, el 18,6% de los conflictos por

la defensa de ecosistemas litorales acaban revirtiendo en una mayor protección del espacio o de los bienes preexistentes.

4.2.3. Resultado de la movilización

Respecto al resultado de la movilización, los diferentes ámbitos analizados siguen un patrón parecido, es decir, una buena parte de los proyectos están aún abiertos (un 37,5%) o son un éxito temporal (un 9,2%), en más de una tercera parte de ellos la movilización ha resultado un éxito o un éxito parcial para paralizar o modificar el proyecto (un 38,8%) y alrededor del 15% acaban ejecutándose tal y como estaban previstos, sin capacidad de incidir en su realización. Estos resultados muestran, en realidad, una gran capacidad de influencia de los movimientos sociales frente a planes de transformación de ámbitos sensibles para la adaptación al cambio climático. Y también muestran la gran cantidad de proyectos aún abiertos, en discusión y en protesta. Un caso emblemático que sale de la normalidad son los casos de gestión del agua, que tiene abiertos el 66,7% de los casos, algunos de los cuales provienen todavía de las décadas de 1970 y 1980, como los vertidos en la costa de Aguadulce y Roquetas de Mar o en el río Serpis, o el trasvase del río Siurana.

4.2.4. Entidades implicadas

El análisis de las entidades, asociaciones o agrupaciones que lideran u organizan las movilizaciones revela, por una parte, una gran diversidad de actores (280 entidades diferentes para 480 movilizaciones), con algunas organizaciones que se distinguen por su presencia en múltiples conflictos.

En Cataluña se contabilizan 100 entidades diferentes para un total de 185 movilizaciones. Destacan IAEDEN-Salvem l'Empordà (45), GEPEC-Ecologistes de Catalunya (42), Ecologistas en Acción (17), Associació de Naturalistes de Girona (16), Plataforma en Defensa de l'Ebre (11), Bosc Verd (8), SOS Costa Brava (7), Greenpeace (7), Salvem Solius (6) y Salvem el Maresme (3).

En la Comunidad Valenciana se observan 71 entidades para 91 conflictos, lo que muestra una mayor fragmentación de entidades, sin que haya asociaciones que estén presentes en numerosos conflictos. Destacan Ecologistas en Acción (7), Per l'Horta (3), Plataforma en Defensa de l'Ebre (2) y Somos Mediterrania (2).

En Murcia se describen 22 entidades para 37 movilizaciones. En este caso, sí que se repiten algunas que aglutinan las protestas. Vemos ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) (17), Ecologistas en Acción (16), Greenpeace (4), WWF (2), Naturactúa (2) y Pacto por el Mar Menor (2).

Finalmente, en Andalucía se contabilizan 87 entidades para 158 protestas. Destacan algunas asociaciones de alta presencia en las movilizaciones, como Ecologistas en Acción (38), Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-EA) (7), Coordinadora Ecologista Almeriense (5), Asociación Ecologista Verdemar-EA (4), Asociación Ciriána (4) y Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) (3).

5. Conclusiones

Este estudio ha permitido documentar, sistematizar e interpretar un conjunto amplio de movilizaciones sociales producidas en el litoral peninsular español en defensa del territorio y el paisaje, en relación —explícita o implícita— con estrategias de mitigación y adaptación en referencia al cambio climático. Entendemos que las preocupaciones históricas por la biodiversidad, los valores paisajísticos, culturales y sociales del litoral español están intrínsecamente alineadas con las necesidades actuales de adaptación y mitigación climática.

La base de datos analizada, con 650 casos recogidos entre la década de 1970 y la actualidad, representa un esfuerzo pionero en la identificación empírica de conflictos territoriales en el Mediterráneo español, y evidencia la creciente articulación entre la acción colectiva y la defensa ambiental en el contexto de la emergencia climática. En términos cuantitativos, el análisis revela que el 63% de los casos analizados se relacionan con estrategias de adaptación, mientras que el 10% lo hace con la mitigación. Las tipologías más frecuentes son la protección de ecosistemas litorales, la planificación urbanística y las infraestructuras resilientes, ámbitos todos ellos directamente vinculados a la capacidad de los territorios para resistir o adaptarse a los impactos del cambio climático.

La distribución territorial muestra una distribución variada de los casos a lo largo de todo el litoral y el establecimiento de particularidades regionales relacionadas con la dinámica y la vocación de sus territorios. La especialización económica en ciertas formas de turismo, construcción, agricultura, industria o producción energética suponen una especialización en la temática de los conflictos, como también respecto a las estrategias de emergencia climática. Una aportación del estudio es, precisamente, la descripción de ejemplos según temas y territorios que permiten disponer de una visión cartográfica y temática más clara de los conflictos ambientales.

Desde la perspectiva temporal, se han observado varias tendencias. Desde el año 2000, vemos un aumento significativo de los conflictos vinculados a la *planificación territorial y urbanística*, tendencia que persistió incluso después de la crisis inmobiliaria de 2008 y que sigue siendo la más numerosa. A partir de 2010, observamos un gran repunte de conflictos para *protección de espacios litorales*, que subraya la continua presión sobre el territorio litoral y la creciente respuesta ciudadana. Y más recientemente, a partir de 2020, vemos el auge en los casos de *mitigación*, especialmente aquellos que se oponen a grandes desarrollos de energías renovables. Esta última ola de conflictos conduce a la paradoja de la mitigación, donde grupos locales y ecologistas contestan contra proyectos de acción climática debido a sus impactos locales (ambientales, sociales, paisajísticos) o por déficits de planificación y participación. Se refleja la complejidad de transitar hacia un modelo más sostenible y la necesidad de integrar la justicia territorial en dicho proceso, como ya apuntaba la literatura sobre la materia.

En cuanto a los resultados de las movilizaciones, se observa una notable eficacia de la acción colectiva: un 38,8% de los casos terminan en éxitos totales o parciales, y un 9,2%, en éxitos temporales. Además, más del 37% de los

conflictos aún están abiertos, lo que indica tanto la persistencia de las amenazas territoriales como la capacidad de resistencia y articulación de la sociedad civil. Es especialmente significativo que una proporción elevada de los conflictos (especialmente en referencia a la gestión del agua) se mantenga activa durante décadas, lo que subraya la resiliencia de las organizaciones locales.

Finalmente, el estudio también destaca la riqueza y la diversidad del tejido asociativo ecologista, con más de 280 entidades implicadas. Si bien algunas organizaciones con mayor trayectoria y presencia (como IAEDEN-Salvem l'Empordà, GEPEC, Ecologistas en Acció o ANSE) lideran múltiples casos, también emergen redes locales que muestran un compromiso sólido con el territorio. En conjunto, el análisis pone en evidencia que la sociedad civil es un actor clave en la defensa del paisaje, como agente de cambio y contrapoder, y puede contribuir por ello a preparar territorios más resilientes frente al cambio climático. Por ello es necesario entender estos movimientos, reconocer su legitimidad y facilitar su participación en las decisiones que modelan el futuro del territorio. Por otro lado, los movimientos sociales territoriales no solo deben tener un rol reactivo, que implica un riesgo de encapsulamiento ideológico y parálisis con propuestas poco efectivas en un contexto de emergencia y de antropoceno, sino que deben contribuir también a reconfigurar los marcos normativos, discursivos y espaciales de la transición ecológica, generando nuevas narrativas en torno a la protección del paisaje y su papel en la adaptación climática. Por ello, su integración en los procesos de planificación y gobernanza territorial, además de su capacidad innovadora, crítica y autocrítica, se presentan como unas condiciones necesarias para lograr una transición justa y eficaz frente al cambio climático.

Las limitaciones inherentes a la naturaleza retrospectiva de parte del análisis y el posible sesgo territorial en la recopilación de datos originales abren vías para futuras investigaciones. Sería de gran valor también profundizar en el análisis discursivo de las movilizaciones más recientes para rastrear la evolución explícita de los argumentos climáticos, investigar con mayor detalle los resultados y las dinámicas de gobernanza en los conflictos emergentes ligados a la *paradoja de la mitigación* y realizar estudios comparativos con otras regiones costeras.

En definitiva, las movilizaciones sociales en el litoral peninsular español, a través de su defensa persistente del territorio y el medio ambiente durante cinco décadas, han actuado como guardianes implícitos y, cada vez más, explícitos de la resiliencia climática. Configuran un vasto repositorio de conocimiento local y compromiso cívico que resulta indispensable para la formulación e implementación de políticas de mitigación y adaptación climática que no solo sean efectivas, sino también equitativas y socialmente justas, tal como demanda una parte creciente de la literatura académica y la propia sociedad civil.

Referencias bibliográficas

- AGUILAR, S. (2021). «Movimientos sociales y relevancia política». En: IBARRA, P. et al. *Impactos: ¿Qué consiguen los movimientos sociales?* Manresa: Bellaterra Edicions, 49-56.

- BOBBIO, L. y ZEPPELELLA, A. (1999). *Perché proprio qui: Grandi opere e opposizioni locali*. Milán: Franco Angeli.
- BRENNER, N. (2004). *New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood*. Oxford: Oxford University Press.
- CASTELLS, M. (1997). *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture*, II. Malden; Oxford: Blackwell.
- DAVICO, L.; MELA, A. y STARICCO, L. (2009). *Città sostenibili. Una prospettiva sociologica*. Bologna: Carocci.
- DÍAZ ORUETA, F. (2023). «Crisis ecosocial, territorio e iniciativas de acción colectiva en España (2011-2022): Estrategias para una transición justa». *Cuaderno Urbano*, 35(35), 169-190.
- FELIU, J.; VICENTE, J.; CASTAÑER, M.; NUSS-GIRONA, S.; ESTRADA, A.; SALADIÉ, S.; FERRANDIS, A.; SANCHEZ, V. et al. (2025). *Movilizaciones sociales para la protección del paisaje del litoral peninsular mediterráneo español* [DataSet]. CORA. Repositori de Dades de Recerca.
- GALAN, J.; GALIANA, F.; KOTZE, D. J.; LYNCH, K.; TORREGGIANI, D. y PEDROLI, B. (2023). «Landscape adaptation to climate change: Local networks, social learning and co-creation processes for adaptive planning». *Global Environmental Change*, 78, 102627.
- GIUGNI, M. y GRASSO, M. T. (2015). «Environmental movements in advanced industrial democracies: Heterogeneity, transformation, and institutionalization». *Annual Review of Environmental Resources*, 40(1), 337-361.
- GRAVANTE, T. y POMA, A. (2020). «El papel del activismo socioambiental de base en la nueva ola del movimiento climático (2018-2020)». *Agua y Territorio / Water and Landscape*, 16, 11-22.
- HUNSBERGER, C.; CORBERA, E.; BORRAS JR., S. M.; FRANCO, J. C.; WOODS, K.; WORK, C., ... y VADDHANAPHUTI, C. (2017). «Climate change mitigation, land grabbing and conflict: Towards a landscape-based and collaborative action research agenda». *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 38(3), 305-324.
- JIMÉNEZ, M. (2013). «La protesta ambiental en España: Aportaciones analíticas al estudio de los condicionantes políticos de la acción colectiva». *Revista Española de Ciencia Política*, 12, 75-98.
- NOGUÉ, J. (1998). *Nacionalismo y territorio*. Lérida: Milenio.
- MARKS, D. (2023). «Social Movements and Climate Adaptation: The Provincial Politics of Coastal Reclamation in Indonesia». *Perspectives on Politics*, 23(2), 452-476.
- MEYER, E. H. (1995). *I pionieri dell'ambiente: L'avventura del movimento ecologista italiano. Cento anni di storia*. Lanciano: Carabba Editore.
- MÚNERA ROLDÁN, C.; COLLOFF, M. J.; VAN KERKHOFF, L. y ANDRADE, G. I. (2023). «Using a futures orientations to enable adaptation of protected areas under climate change». *People and Nature*, 5(6), 2141-2157.
- NEL-LO, O. (ed.) (2003). *Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya*. Barcelona: Empúries.
- NUSS, S.; DELPONTE, I.; VICENTE, J. y COSTA, V. (2023). «Environmental movements shaping the landscape in Genoa and Girona: From reactive to regenerative local mobilizations?». *Progress in Planning*, 178, 100777.
- NUSS, S.; VICENTE, J. y CANALETA, G. (2020). «50 Years of Environmental Activism in Girona, Catalonia: From Case Advocacy to Regional Planning». *Land*, 9, 172. <<https://doi.org/10.3390/land9060172>>

- RODRÍGUEZ-SEGURA, F. J.; OSORIO-ARAVENA, J. C.; FROLOVA, M.; TERRADOS-CEPEDA, J. y MUÑOZ-CERÓN, E. (2023). «Social acceptance of renewable energy development in southern Spain: Exploring tendencies, locations, criteria and situations». *Energy Policy*, 173, 113356.
- ROOTES, C. (2004). «Environmental movements». En: SNOW, D. A.; SOULE, S. A. y KRIESI, H. (eds.). *The Blackwell companion to social movements*. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 608-640.
<<https://doi.org/10.1002/9780470999103.ch26>>
- SCHEIDEL, A. et al. (2018). «Ecological distribution conflicts as forces for sustainability: An overview and conceptual framework». *Sustainability Science*, 13(3), 585-598.
- (2020). «Environmental conflicts and defenders». *Global Environmental Change*, 63, 1-15.
<<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104>>
- STOREY, D. (2018). Territory and territoriality. *Handbook on the Geographies of Regions and Territories*, 34-43.
- SUBRÁ, P. (2016). *Géopolitique locale : Territoires, acteurs, conflits*. París: Armand Colin.
- TILLY, C. (2004). *Social movements 1768-2004*. Nueva York: Routledge.
- TOURAINE, A. (1981). *The voice and the eye: An analysis of social movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- VILLAMAYOR-TOMÁS, S. y GARCÍA-LÓPEZ, G. A. (2021). «Commons movements: Old and new trends in rural and urban contexts». *Annual Review of Environment and Resources*, 46, 511-543.
- ZOGRAFOS, C. y MARTÍNEZ-ALIER, J. (2009). «The politics of landscape value: A case study of wind farm conflict in rural Catalonia». *Environment and Planning A*, 41(7), 1726-1744.